



## Asamblea General

Distr. general  
25 de julio de 2013  
Español  
Original: inglés

---

### Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

### **Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 66º período de sesiones, 29 de abril a 3 de mayo de 2013**

#### **Nº 12/2013 (Bahrein)**

#### **Comunicación dirigida al Gobierno el 30 de julio de 2012**

**Relativa a: Nabeel Abdulrasool Rajab**

**El Gobierno respondió a la comunicación el 24 de septiembre de 2012.**

#### **El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42. El mandato del Grupo de Trabajo fue especificado y prorrogado por la Comisión en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010. Actuando de conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/16/47, anexo, y Corr.1), el Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno la comunicación arriba mencionada.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, y lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los derechos humanos (categoría V).

### **Información recibida**

#### *Comunicación de la fuente*

3. Nabeel Ahmed Abdulrasool Rajab (en adelante, el Sr. Rajab), nacido el 1 de enero de 1964, nacional de Bahrein, es Presidente del Centro de Bahrein para los Derechos Humanos, Director del Centro del Golfo para los Derechos Humanos y Secretario General Adjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) desde 2010. También es Presidente de Coordination of Action Research on AIDS and Mobility para Asia, miembro asesor de Human Rights Watch en Oriente Medio y África del Norte y ganador del Premio Ion Ratiu a la Democracia.

4. Entre el 5 y el 28 de mayo de 2012, el Sr. Rajab fue detenido y acusado de "insultar a los órganos estatutarios" a través de Twitter, "participar en una reunión ilegal" e "incitar a otros a sumarse a ella" mediante redes sociales. El 5 de mayo de 2012, el Sr. Rajab fue detenido por agentes de la policía por orden de la fiscalía cuando regresaba a Bahrein procedente del extranjero. Ni el Sr. Rajab ni sus abogados fueron informados del motivo de su detención hasta que compareció ante la fiscalía al día siguiente. El 6 de mayo de 2012, el Sr. Rajab fue acusado por el Tribunal Penal de Primera Instancia de Manama de "incitación a la participación en manifestaciones ilegales a través de las redes sociales". El 28 de mayo de 2012, después de permanecer tres semanas detenido, fue puesto en libertad bajo fianza. El 27 de junio de 2012, el Tribunal dictó una sentencia firme, en la que condenaba al Sr. Rajab al pago de una multa de 300 dinares de Bahrein (unos 796 dólares de los Estados Unidos) por haber "insultado a los órganos estatutarios".

5. El 2 de junio de 2012, el Sr. Rajab publicó comentarios a través de Twitter, un servicio de redes sociales en línea, dirigidos al Primer Ministro de Bahrein, que se encontraba de visita en la ciudad de Al-Muharraq. El Sr. Rajab también pidió su dimisión, alegando que el pueblo de Al-Muharraq solo le había dado la bienvenida porque recibía subvenciones del Estado.

6. Entre el 6 y el 27 de junio de 2012, el Sr. Rajab fue detenido, ya que la fiscalía decidió que permaneciera en prisión preventiva mientras se investigaba lo sucedido. Al parecer, la decisión se adoptó después de que los habitantes de Al-Muharraq acusaran al Sr. Rajab de "vilipendiar públicamente a los ciudadanos de Al-Muharraq y poner en duda su patriotismo con la publicación de declaraciones deshonrosas en las redes sociales".

7. Según se informa, el 9 de julio de 2012 la policía detuvo por la fuerza al Sr. Rajab en su domicilio, tras la celebración de una vista y la emisión de un veredicto. Ese mismo día, el Tribunal Penal de Primera Instancia N° 5 condenó al Sr. Rajab a tres meses de prisión por un delito de difamación contra los residentes de Al-Muharraq. Se alega que la demanda por difamación contra el Sr. Rajab fue presentada en nombre de los ciudadanos de Al-Muharraq por personas que formaban parte del Gobierno o eran afines a él.

8. Se tienen noticias de que se han presentado dos recursos de apelación contra el veredicto. El primer recurso contenía una solicitud de suspensión de la pena que fue rechazada por el juez; en el segundo recurso se solicitaba la conmutación de la pena por

trabajos comunitarios, de conformidad con el artículo 371 del Código Penal de Bahrein. Según se informa, los tribunales suelen castigar los casos de difamación con multas y no con penas de prisión. La primera vista del segundo recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Apelación, inicialmente prevista para el 18 de julio de 2012, fue aplazada al 24 de julio de 2012. El tribunal se negó a poner al Sr. Rajab en libertad bajo fianza.

9. Estaba previsto que el 5 de agosto de 2012 el Tribunal Superior de Apelación examinara un recurso presentado por los abogados del Sr. Rajab en relación con la condena a tres meses de prisión dictada contra él el 9 de julio de 2012 por el Tribunal Penal de Primera Instancia N° 5. Esa sentencia se refería a los cargos de presunta difamación mediante un *tuit* publicado en su cuenta de Twitter el 2 de junio de 2012.

10. Según se informa, el Sr. Rajab debía enfrentarse a otros dos juicios, uno por "participación en una reunión ilegal e incitación a la organización de una manifestación sin previo aviso a las autoridades de Manama" y otro por "participación en prácticas ilegales e incitación a la reunión y la organización de manifestaciones no autorizadas a través de las redes sociales", y podía ser condenado a prisión por ellos. Estaba previsto que los juicios de ambos casos se celebraran el 26 de septiembre de 2012. Según la fuente, el Sr. Rajab fue encarcelado en la prisión central de Jaw en condiciones muy duras. Se le denegó la asistencia médica, pese a sufrir problemas de salud graves, como presión arterial alta, arritmia y dolor de espalda. Al parecer, ni su familia ni sus abogados pudieron visitarlo.

11. La fuente sostiene que la detención del Sr. Rajab es arbitraria, ya que fue resultado directo del ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de opinión y de expresión, de reunión pacífica y de participación en la dirección de los asuntos públicos, de conformidad con los artículos 19, 21 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los cargos relacionados con el uso del Sr. Rajab de su cuenta de Twitter atentan directamente contra su derecho a la libertad de expresión. En sus *tuits*, el Sr. Rajab criticaba la impunidad de los presuntos ataques a civiles por parte de grupos armados y culpaba de ello al Ministerio del Interior. Según la fuente, tales críticas son legítimas y necesarias en una sociedad democrática, y no pueden considerarse un "insulto público". De acuerdo con el razonamiento expuesto por el Comité de Derechos Humanos en su Observación general N° 25, la plena aplicación del artículo 25 del Pacto conlleva la posibilidad de "comentar cuestiones públicas sin censura ni limitaciones, así como de informar a la opinión pública"<sup>1</sup>. En su Observación general N° 34, el Comité recuerda que el artículo 19, párrafo 2, del Pacto "protege todas las formas de expresión y los medios para su difusión [...], que] comprenden [...] modos de expresión audiovisuales, electrónicos o de Internet, en todas sus formas"<sup>2</sup>.

12. De forma análoga, los cargos relacionados con la participación del Sr. Rajab en las protestas pacíficas celebradas en febrero y marzo de 2012 contravienen el artículo 21 del Pacto. En su resolución 15/21, el Consejo de Derechos Humanos "exhorta a los Estados a que respeten y protejan plenamente los derechos de todas las personas a la libertad de reunión pacífica y de asociación, [...] con inclusión de las personas que abracen convicciones o creencias minoritarias o disidentes, los defensores de los derechos humanos, las personas afiliadas a sindicatos y las demás personas, incluidos los migrantes, que traten de ejercer o promover esos derechos, y a que adopten todas las medidas necesarias para asegurar que cualquier restricción del libre ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación sea conforme con las obligaciones que les incumben en virtud de las normas internacionales de derechos humanos" (párr. 1).

<sup>1</sup> Comité de Derechos Humanos, Observación general N° 25 (1996) sobre la participación en los asuntos públicos y el derecho de voto (art. 25), párr. 25.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Observación general N° 34 (2011) sobre el artículo 19: libertad de opinión y libertad de expresión, párr. 12.

13. La fuente afirma que existe una relación auténtica entre las continuas órdenes de detención emitidas contra el Sr. Rajab y su participación directa y activa en las protestas pacíficas y su ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Según la fuente, no hay ningún motivo válido para restringir esos derechos en el presente caso y la fiscalía no ha presentado ninguna prueba en contrario. En este sentido, la Observación general N° 34 del Comité establece que "cuando un Estado parte impone restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, estas no pueden poner en peligro el derecho propiamente dicho" (párr. 21). Toda restricción permisible debe: 1) estar prevista por la ley; 2) proteger uno de los propósitos enumerados; y 3) ser necesaria para lograr ese propósito<sup>3</sup>.

14. En opinión de la fuente, la fiscalía no ha determinado la naturaleza concreta de la amenaza que representaba el ejercicio de la libertad de expresión del Sr. Rajab para la seguridad nacional o el orden público de Bahrein<sup>4</sup>. La fuente destaca que la medida de detención adoptada por las autoridades no es proporcional ni necesaria en relación con el valor que desean proteger. Por el contrario, la detención del Sr. Rajab es una medida tomada por las autoridades para silenciar sus esfuerzos por llamar la atención sobre las violaciones de los derechos humanos que sufren los defensores de esos derechos y los opositores políticos, reales o aparentes, en Bahrein, en particular desde el levantamiento popular que se produjo en el país en febrero de 2011, mediante el uso de Twitter, Facebook y otras herramientas de las redes sociales y los medios de comunicación.

#### *Respuesta del Gobierno*

15. En una carta de fecha 24 de septiembre de 2012, el Gobierno informó al Grupo de Trabajo de que el 9 de julio de 2012 el Sr. Rajab había ingresado en el Centro de Reforma y Rehabilitación para cumplir la pena de tres meses de prisión que se le impuso en la causa N° 5807/2012. El Sr. Rajab fue condenado a otras tres penas de un año de prisión (es decir, tres años de cárcel en total) el 16 de agosto de 2012, como se explica a continuación.

16. El acusado fue detenido mientras participaba en una manifestación ilegal el 14 de febrero de 2012. Fue acusado de participar con desconocidos en una reunión, incitar a organizar una manifestación sin previo aviso a las autoridades y participar en una manifestación que ponía en peligro la seguridad pública sin previo aviso a las autoridades. El 6 de mayo de 2012, el acusado compareció ante el tribunal acompañado de su abogado, Mohammed Al-Jishi. El tribunal decidió aplazar la vista al 26 de septiembre de 2012, a fin de poder escuchar a los testigos de la defensa. La vista se adelantó al 16 de agosto de 2012. El tribunal condenó al acusado a un año de prisión por cada uno de los tres cargos (es decir, tres años de cárcel). El acusado recurrió la decisión, y el juicio de apelación se fijó el 5 de agosto de 2012 (sic), pero después se aplazó al 23 de agosto de 2012. El 23 de agosto de 2012, el acusado fue absuelto de los cargos que se le imputaban.

17. En cuanto a la denuncia de que el Sr. Rajab había sido encarcelado en la prisión de Jaw en condiciones muy duras y se le había denegado la atención médica para sus graves problemas de salud, el Gobierno hizo hincapié en que el Sr. Rajab disfrutó de todos los derechos establecidos por la ley, incluido el derecho a recibir visitas de familiares y de sus representantes legales, así como el derecho a recibir la atención médica necesaria, en las mismas condiciones que los demás reclusos. Desde que ingresó en el Centro de Reforma y Rehabilitación el 11 de julio de 2012 hasta el 27 de agosto de 2012, el Sr. Rajab recibió un total de ocho visitas de su familia y sus representantes legales, como se detalla a continuación:

<sup>3</sup> Véase Comité de Derechos Humanos, comunicación N° 926/2000, *Shin c. la República de Corea*, dictamen aprobado el 16 de marzo de 2004, párr. 7.3.

<sup>4</sup> Véase Comité de Derechos Humanos, comunicación N° 518/1992, *Sohn c. la República de Corea*, dictamen aprobado el 19 de julio de 1995, párr. 10.4.

<i>Fecha</i>	<i>Tipo de visita</i>	<i>Número de visitantes</i>	<i>Observaciones</i>
11 de julio de 2012	Familia	7	El recluso rechazó la visita
12 de agosto de 2012 <sup>5</sup>	Abogados	2	Se presentaron dos abogados, Mohammed Al-Jishi y Mohammed Ahmed; el recluso rechazó reunirse con ellos
19 de julio de 2012	Familia	12	La visita familiar tuvo lugar
29 de julio de 2012	Abogados	2	La visita de los abogados Mohammed Al-Jishi y Mohammed Ahmed tuvo lugar
1 de agosto de 2012	Abogados	1	La visita del abogado Jalilah Al-Sayyid tuvo lugar
6 de agosto de 2012	Familia	14	La visita familiar tuvo lugar
15 de agosto de 2012	Familia	8	La visita familiar tuvo lugar
27 de agosto de 2012	Abogados	2	La visita de los abogados Mohammed Al-Jishi y Mohammed Ahmed tuvo lugar

18. El Gobierno declaró que, según el historial médico, el Sr. Rajab tenía la presión arterial alta antes de entrar en el Centro de Reforma y Rehabilitación. El 9 de julio de 2012, el médico del Centro sometió al Sr. Rajab al examen rutinario para los nuevos reclusos y le recetó la medicación necesaria, que le fue suministrada por el personal de enfermería a las horas prescritas. Recibió el seguimiento médico necesario, en las mismas condiciones que los demás reclusos. Entre el 9 de julio y el 24 de agosto de 2012, tuvo un total de siete citas médicas de seguimiento y se le dispensaron todos los medicamentos necesarios. El 9 de agosto de 2012 tenía cita en una clínica para controlar su estado de salud, ya que padecía una enfermedad crónica que requería seguimiento, pero se negó a asistir.

19. En cuanto a la detención del Sr. Rajab a su regreso del extranjero sin que se le informara de los motivos de la misma, el Gobierno declaró que, con arreglo a la orden de detención y la citación a comparecer emitidas por la fiscalía el 3 de mayo de 2012 en relación con la causa N° 30313/2012/02, el Sr. Rajab fue detenido el 5 de mayo de 2012 en el aeropuerto internacional de Bahrein, cuando regresaba del extranjero. Se le entregó la orden de detención y la citación a comparecer; se le informó de todos sus derechos y se le trató con respeto y de conformidad con la ley. El Sr. Rajab fue acompañado a la clínica del Ministerio del Interior para que un especialista le realizara un examen médico y un chequeo. A continuación se le acompañó a la Dirección de Seguridad. Se le permitió hablar con su esposa al llegar a la Dirección y antes de su detención, cuando entregó sus efectos personales. Además, se le permitió hacer la correspondiente llamada telefónica antes de ser encarcelado. Permaneció en prisión preventiva y compareció ante la fiscalía al día siguiente, según dispone la ley. El 6 de mayo de 2012, el Sr. Rajab compareció ante la fiscalía para que se pudieran iniciar los procedimientos judiciales necesarios. La fiscalía dictó una orden de prisión preventiva durante los siete días que iba a durar la investigación, prorrogables de acuerdo con la ley. Cabe señalar que el Sr. Rajab recibió la visita de cuatro miembros de su familia ese día (6 de mayo de 2012).

<sup>5</sup> Fecha que figura en el documento original.

20. Por último, el Reino de Bahrein recalcó su firme determinación a tratar a todos los presos de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, a fin de garantizar sus derechos, respetar su dignidad humana y garantizar que no serán sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por otra parte, señaló que vela por que todos los reclusos del Centro disfruten de los derechos consagrados en las leyes y los reglamentos en vigor en el Reino. Todos los derechos y las garantías del Sr. Rajab se respetaron durante el proceso de investigación ante la fiscalía y durante el juicio. Además, el acusado tiene derecho a apelar la sentencia ante un tribunal de apelación y el Tribunal de Casación, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal y el Tribunal de Casación. El Gobierno afirmó su compromiso con el respeto de los principios de derechos humanos, así como su disposición a colaborar para preservar la dignidad humana y el respeto de los derechos humanos.

*Comentarios adicionales de la fuente*

21. La fuente se refiere a la respuesta del Gobierno de Bahrein, en la que se alegaba que la detención y el encarcelamiento del Sr. Rajab se habían basado en las sentencias dictadas el 9 de julio y el 16 de agosto de 2012, y al hecho de no haber probado que la privación de libertad del Sr. Rajab obedeció a motivos distintos del ejercicio de los derechos y las libertades establecidos en los artículos 7, 10, 13, 14, 18, 19 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, en la medida en que concierne a los Estados partes, en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

22. La fuente afirma que el Gobierno de Bahrein reconoce que el Sr. Rajab fue detenido, condenado y encarcelado en relación con el ejercicio de derechos humanos universalmente reconocidos, en particular el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión pacífica (que incluye el derecho a manifestarse mediante la reunión pacífica y la libertad de expresión, de manera individual o colectiva, para promover y proteger los derechos humanos). Esos derechos están protegidos por los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 5, 6 y 12 de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos y los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

23. Además, la detención del Sr. Rajab debe considerarse arbitraria, pues constituye una forma de acoso judicial que contraviene las normas internacionales de derechos humanos y las correspondientes obligaciones de Bahrein. La detención también es arbitraria porque su objetivo era sancionar al Sr. Rajab e impedirle actuar en favor de la promoción y el respeto por las autoridades nacionales de Bahrein de las normas de derechos humanos universalmente reconocidas.

24. La fuente también afirma que el único propósito de la detención, la prisión preventiva, el enjuiciamiento, las condenas y el encarcelamiento del Sr. Rajab ha sido castigar e impedir su labor como defensor de los derechos humanos y, por lo tanto, este caso pertenece a la categoría II de la privación arbitraria de libertad, según la definición establecida por el Grupo de Trabajo, y que su detención infringe el artículo 9, párrafo 1, del Pacto. La fuente añade que el 10 de septiembre de 2012 se permitió al Vicepresidente de la FIDH visitar al Sr. Rajab en su celda. De acuerdo con la información proporcionada por la fuente, las condiciones de detención del Sr. Rajab eran bastante buenas en el momento de la visita. El Sr. Rajab solo se quejó de haber permanecido en régimen de aislamiento en una habitación sucia durante una noche en agosto de 2012.

25. La fuente indicó que el 5 de mayo de 2012 el Sr. Nabeel Rajab fue detenido por agentes de policía no uniformados a su llegada al aeropuerto de Manama procedente del Líbano y trasladado a la comisaría de Al-Hawra. Los policías que efectuaron la detención señalaron que obedecían órdenes de la fiscalía. Sin embargo, en ese momento, ni el

Sr. Rajab ni sus abogados fueron informados de los motivos de la detención. El 6 de mayo de 2012, el Sr. Rajab compareció ante la fiscalía, que le informó de las razones de la detención. Según los abogados del Sr. Rajab, se le acusaba de "insultar a los órganos estatutarios", un delito que, de conformidad con el artículo 216 del Código Penal, está castigado con una pena de hasta tres años de prisión y una multa, por la publicación de tuits que se consideraban "insultos" al Ministerio de Interior.

26. Cabe señalar que se prohibió entrar en la sala a los representantes del Centro de Bahrein para los Derechos Humanos, tanto en el procedimiento en primera instancia como en el de apelación. El 10 de septiembre de 2012 comenzó el procedimiento de apelación ante el Tribunal de Apelación de Bahrein. El Tribunal rechazó las peticiones de los abogados del Sr. Rajab de ponerlo en libertad bajo fianza. Durante la vista, los abogados del Sr. Rajab también presentaron una solicitud para unir los cargos de las tres causas y otra para añadir al sumario un informe en el que se indicaba que el Sr. Rajab había sido golpeado por la policía. El Tribunal fijó la siguiente vista para el 27 de septiembre de 2012. En ella, los abogados del Sr. Rajab trataron de presentar una solicitud de revisión de la decisión de no concederle la libertad provisional.

27. Estaba previsto que el procedimiento de apelación se reanudara el 27 de septiembre de 2012 con el examen de las pruebas y las declaraciones de los testigos relacionados con las tres causas penales aportados tanto por la fiscalía como por la defensa. Los abogados del Sr. Rajab cuestionaron la imparcialidad del juicio sobre la base de que las pruebas de la defensa no se habían estudiado antes de imponer las condenas y dictar sentencia.

28. El 27 de septiembre de 2012, el Tribunal de Apelación de Bahrein se negó una vez más a poner en libertad bajo fianza al Sr. Nabeel Rajab. Finalmente, el Tribunal ordenó que se unieran las tres causas pero no dijo expresamente que fuera a emitir un solo fallo y una sola sentencia. Por lo tanto, es posible que el tribunal conozca de las tres causas juntas pero siga dictando tres sentencias independientes. Durante la vista, el juez mostró un DVD que contenía imágenes del Sr. Rajab participando en manifestaciones pacíficas y discutiendo con un policía sobre la legalidad de la protesta, así como imágenes de jóvenes lanzando cócteles molotov durante lo que el juez señaló que era una de esas protestas. Los abogados del Sr. Rajab insistieron en que las imágenes de esa última parte no correspondían al mismo lugar ni momento que la mencionada protesta pacífica. El Sr. Rajab recordó además que en ninguna de las protestas en que había participado se habían producido escenas de violencia. Los abogados del Sr. Rajab creen que esa parte del DVD estaba trucada.

29. La defensa pidió al Tribunal que otorgara visados a los testigos extranjeros que representan a las principales organizaciones de derechos humanos con las que está vinculado el Sr. Nabeel Rajab, en particular Marie Camberlin (FIDH), Couva de la Camba (Amnistía Internacional), Josh Brian (abogado estadounidense) y Joe Stork (Human Rights Watch). Estaba previsto que el procedimiento de apelación se reanudase el 16 de octubre de 2012 con las declaraciones de los testigos de la defensa y el vídeo de la defensa.

30. A pesar de las peticiones de los abogados de la defensa, el Tribunal se negó a facilitar o apoyar la emisión de visados para los testigos internacionales. El 16 de octubre de 2012, el Tribunal de Apelación de Bahrein reanudó el juicio de apelación. A la vista asistió Antoine Aussedat, abogado francés al que el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos había encargado una misión internacional de observación de juicios. Fue el único observador presente en la vista enviado por una organización no gubernamental internacional. Varios diplomáticos representantes de países occidentales también estuvieron presentes en ella. Se denegó la entrada en Bahrein al menos a un extranjero llamado a declarar como testigo de la defensa. El 16 de octubre de 2012 se denegó la entrada en Bahrein a la representante de la FIDH, Stéphanie David, Directora de la Oficina de Oriente Medio y África del Norte, que había sido llamada a declarar como testigo por la defensa. Los abogados del Sr. Rajab habían solicitado

formalmente al Tribunal que enviara una carta a las autoridades aduaneras para facilitar la entrada de varios testigos internacionales, entre ellos la Sra. David, pero el Tribunal se negó a hacerlo.

31. Pese a la falta de apoyo del Tribunal, la FIDH, junto con los abogados de la defensa, decidió confirmar el viaje de la Sra. David a Bahrein para asistir a la vista. En ella, la petición de los abogados de la defensa de llamar a declarar a los testigos internacionales fue rechazada por el Tribunal, alegando que sus testimonios no eran "pertinentes". Los abogados de la defensa protestaron por que parte de las pruebas utilizadas para condenar al Sr. Rajab aún no se habían examinado públicamente y por que no habían tenido acceso a todas las pruebas a su debido tiempo. En efecto, en el juicio de apelación, los abogados de la defensa solicitaron al Tribunal que proyectara un vídeo que había sido utilizado como prueba para condenar al Sr. Rajab, ya que no se había mostrado ante la sala en el juicio en primera instancia. El Tribunal de Primera Instancia había insistido en que dicho vídeo se mostrara únicamente a puerta cerrada, algo a lo que los abogados de la defensa se oponían, insistiendo en que se mostrara ante la sala. El Tribunal de Apelación informó a la defensa de que el vídeo no podía mostrarse porque había desaparecido del sumario. El Tribunal trató de proyectar un segundo vídeo presentado por la fiscalía que no figuraba en el sumario. Después de un breve intento, el Tribunal suspendió la sesión durante más de dos horas para solucionar algunos problemas técnicos. Cuando se reanudó la vista, el Tribunal anunció que el juicio se aplazaba de nuevo al 8 de noviembre de 2012.

32. El 8 de noviembre de 2012, el Tribunal de Apelación de Bahrein reanudó el juicio de apelación contra la condena de tres años de prisión impuesta al Sr. Rajab el 16 de agosto de 2012 por el Tribunal Penal de Primera Instancia en las tres causas relativas a su participación en reuniones pacíficas en favor de las libertades fundamentales y la democracia. En la vista volvió a contarse con la presencia de Antoine Aussedat, el abogado francés encargado por el Observatorio de llevar a cabo una misión internacional de observación de juicios. Fue el único observador enviado por una organización no gubernamental internacional. Varios diplomáticos representantes de países occidentales, entre ellos los Estados Unidos de América, también asistieron al juicio.

33. Durante la vista, el Tribunal denegó una nueva solicitud para que se pusiera en libertad condicional al Sr. Rajab. A continuación se proyectaron varios vídeos: cinco de ellos, presentados por la fiscalía, contenían imágenes tomadas por la policía de la manifestación en relación con la cual se había detenido al Sr. Rajab, otros tres, presentados por los abogados de la defensa, recogían discursos y entrevistas que demostraban que el Sr. Rajab abogaba por la no violencia, y otro mostraba imágenes de una manifestación en la que la policía cargaba contra el Sr. Rajab y le causaba heridas, así como extractos de un programa de televisión progubernamental, en el que el Sr. Rajab era representado como un peligroso agitador y manipulador. El contenido de los vídeos fue examinado por el Tribunal y los abogados de la defensa.

34. Por último, el Tribunal denegó la petición presentada por los abogados del Sr. Rajab de recurrir al Tribunal Supremo para que emitiera una decisión prejudicial sobre la constitucionalidad y legalidad de la ley que prohibía las manifestaciones en Bahrein en relación con los convenios internacionales. Se anunció que el veredicto se haría público el 11 de diciembre de 2012. En vista de todo lo anterior, la fuente considera que el incumplimiento de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio justo, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es tan grave que permite calificar la detención del Sr. Rajab de arbitraria.



## Deliberaciones

35. El Grupo de Trabajo toma nota de que, según la información proporcionada por la fuente, el Sr. Rajab fue detenido y se enfrentó a un juicio por tres cargos: i) insultos a los órganos estatutarios; ii) participación en manifestaciones ilegales e incitación a sumarse a ellas; y iii) presunta difamación contra los residentes en la ciudad de Al-Muharraq.

36. En su respuesta, el Gobierno declaró que la detención y el encarcelamiento del Sr. Rajab se habían debido al ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, de opinión y de reunión. Según el Gobierno, el Sr. Rajab fue detenido y condenado por "participar con otras personas no identificadas en una reunión, incitar a la organización de una manifestación sin previo aviso a las autoridades y participar en una manifestación que ponía en peligro la seguridad pública sin previo aviso a las autoridades". El Sr. Rajab ha sido condenado por esos delitos a tres años de cárcel, es decir, un año de prisión por cada delito.

37. Las cuestiones que debe determinar el Grupo de Trabajo son: a) si las presuntas actividades del Sr. Rajab constituyen un delito castigado con una pena de prisión y una multa, con arreglo a la legislación nacional de Bahrein; de ser así; b) si ello es compatible con las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas por el Reino de Bahrein como parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; c) si en el momento de la detención y el encarcelamiento se respetaron las garantías procesales; y d) si se ha respetado el derecho a un juicio justo.

38. De la respuesta del Gobierno se desprende que el Sr. Rajab fue detenido y condenado en virtud de las leyes nacionales vigentes en Bahrein, que parecen denegar a las personas el derecho básico a la libertad de opinión, de expresión y de reunión, ya sea de manera individual o en asociación con otros. El Reino de Bahrein es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que incurre en la obligación jurídica internacional de armonizar su legislación interna con los instrumentos de derechos humanos de los que es signatario. El Gobierno ha declarado: "afirmamos nuestro compromiso con el respeto de los principios de derechos humanos, así como nuestra disposición a colaborar para preservar la dignidad humana y el respeto de los derechos humanos".

39. El derecho a un juicio justo incluye el acceso a un abogado, la presentación de pruebas y la aportación de testigos de la defensa. Desde que el Sr. Rajab fue detenido el 5 de mayo de 2012, se han celebrado varios juicios en los que esos derechos solo se han respetado parcialmente. El hecho de que el departamento gubernamental pertinente no facilitara la presencia de testigos extranjeros en los juicios es una de esas irregularidades; proyectar una prueba de vídeo a puerta cerrada en vez de ante la sala es otra.

40. El Grupo de Trabajo considera que, a fin de garantizar el derecho a un juicio justo, los tribunales de Bahrein tendrían que abordar y resolver la cuestión de la constitucionalidad y legalidad de la ley que prohíbe las manifestaciones públicas. Ese es el quid de la cuestión que nos ocupa. Los tribunales nacionales no pueden consentir que se deniegue el derecho a la libertad de opinión y de expresión, derecho humano universalmente reconocido, como sucedió en el caso del Sr. Rajab.

41. El Gobierno no ha esgrimido ninguna otra razón para detener al Sr. Rajab que no sea el ejercicio de los derechos consagrados en los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

**Decisión**

42. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Nabeel Ahmed Abdulrasool Rajab es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, párrafo 1, 14, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías II y III aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

43. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo solicita al Gobierno del Reino de Bahrein que adopte las medidas necesarias para reparar la situación del Sr. Rajab y hacer que se cumplan las normas y los principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

44. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, la reparación adecuada sería poner en libertad inmediatamente al Sr. Rajab y concederle el derecho efectivo a obtener reparación, de conformidad con el artículo 9, párrafo 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

45. El Grupo de Trabajo alienta al Gobierno del Reino de Bahrein a que ponga la legislación nacional en conformidad con las disposiciones sustantivas del Pacto, en el que es parte.

[Aprobada el 3 de mayo de 2013.]

---